



GD-F-008 V.9

Página 1 de 10

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010231175 DEL 28/11/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

LA DIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300104825 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *“se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que *“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”*.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300104825 de 29 de junio del 2017, delegó en la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el municipio de ICONONZO del departamento de TOLIMA, es de categoría 6 y al haber sido prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2016, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6. y 2.3.5.1.2.1.7. del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20174010150315 del 1 de septiembre de 2017, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de ICONONZO del departamento de TOLIMA, por no haber cumplido los siguientes requisitos establecidos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

- *“Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida.”*



C014/5927



C014/5927

obf

- *"Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complementa o sustituya"*

La referida resolución se notificó personalmente al ente territorial el 20 de septiembre de 2017.

El municipio de Icononzo – Tolima, mediante escritos radicados bajo el No. 20175290803942 del 28 de septiembre de 2017, 20175290817832 del 2 de octubre de 2017 y 20175290821292 del 3 de octubre de 2017 y 20175290837192 del 6 de octubre de 2017 interpuso oportunamente recurso de reposición contra la resolución de descertificación.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1 Como argumentos del recurso, se allegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

- Manifiesta que el municipio de Icononzo – Tolima, el día 17 de abril de 2017, cumplió con el reporte o cargue oportuno al SUI de la *"certificación expedida por la Secretaria Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida"*, sin embargo, el hecho que no hubiese constado en la misma que la estratificación aplicada estuvo conforme a la metodología nacional establecida, no quiere decir que no se hubiese aplicado. Por lo anterior, mediante radicado N.º 20175290803932 del 28 de septiembre de 2017 se solicitó la reapertura del aplicativo inspector con el objeto de reversar la información reportada el día 17 de abril de 2017 y cargar y certificar una nueva certificación en la que se indica: *"que la estratificación aplicada en la vigencia 2016 estuvo conforme a la metodología nacional establecida"*.
- Argumenta que el día 4 de abril de 2017 el Municipio de Icononzo cumplió con el reporte o cargue oportuno al SUI del Acuerdo municipal N.º 003 del 24 de mayo de 2013 por medio del cual se establecen los factores de subsidio y contribuciones para los usuarios de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio, no obstante, la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado concluyó que el acto administrativo reportado solo fijo porcentajes de subsidio para el cargo fijo del servicio de alcantarillado, pero no para el vertimiento básico.

Sin embargo, indica que el Decreto 1013 del 4 de abril de 2005, el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, el artículo 99 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 2 de la Ley 632 de 2000, no señalan que deba fijarse subsidios al consumo de vertimientos en el servicio de alcantarillado, por lo tanto solicita: *"Que no se nos exija que el concejo municipal, tenga que aprobar subsidios al consumo de vertimientos del servicio de alcantarillado, porque no existe ley, norma o regulación que ahí lo exija; siendo potestativo de este órgano definir este beneficio para los usuarios..."*

- Indica que en las vigencias 2014 y 2015 fue reportado el mismo acuerdo N.º 003 de 2013 dándose cumplimiento a este indicador sin que se haya recibido observación alguna por parte de esta Superintendencia, por lo que no es claro que habiendo reportado dicho documento en vigencias anteriores, a esta fecha se realice una observación sobre el mismo, sin argumentos de ley que así lo justifiquen, con lo que manifiesta que se le negó la posibilidad de hacer las correcciones en esa vigencia y que el cambio de posición de esta entidad frente a la legalidad del acuerdo en mención irrumpe en la inseguridad jurídica y normativa del sector de agua potable y saneamiento básico.
- Solicitó sea revisado y analizado nuevamente el acuerdo en cuestión como acto vigente, señalando que los porcentajes señalados cumplen con los requerimientos legales. Además de lo anterior, señala que si bien es cierto al servicio de acueducto se le asignaron subsidios al cargo fijo y al consumo básico, tal situación no implica que se tendrían que aprobar los mismos porcentajes para el servicio de alcantarillado y

tampoco existe ley, normativa o regulación que establezca que se deban asignar los mismos porcentajes de subsidio tanto para el cargo fijo como para el consumo básico en los servicios de acueducto y alcantarillado.

- Además de lo anterior el Municipio cita en su recurso, los artículos 99.7 y 99.6 de la Ley 142 de 1994, el artículo 2.3.4.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 2.3.4.2.2 del Decreto 1077 de 2015, concluyendo que el Concejo Municipal sí puede aprobar montos diferencias de subsidios tanto para el cargo fijo como para el consumo básico en los servicios de acueducto y alcantarillado y que puede no aprobar subsidios para alguno de estos conceptos puesto que lo dispuesto por la Ley son valores máximos, contrario a lo que sucede con los aportes solidarios o contribuciones que son valores mínimos.
- Manifiesta que conforme a lo establecido en el segundo inciso del artículo 2.3.5.1.2.1.10 del Decreto N.º 1077 de 2015 en el proceso que adelanta la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado para certificar o descertificar a un municipio se deben aplicar las normas del Código de Procedimiento Administrativo en cuanto a la actuación administrativa, notificaciones, pruebas y recursos y que las actuaciones administrativas se desarrollaran especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Así mismo señala que la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado se encuentra plenamente facultada para aplicar lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del CPCA en orden a tener en cuenta el Acuerdo N.º. 003 del 24 de mayo de 2013 expedido por el Concejo de Icononzo con el propósito de culminar adecuadamente la actuación administrativa prevista en la Ley 1176 de 2007 y en el Decreto 1077 de 2015, en consideración a que la práctica y aporte de pruebas o requerimientos formales son figuras idóneas y ajustadas a derecho para obtener la información que resulte necesaria para culminar un proceso de certificación en virtud del principio de eficacia según el cual debe propenderse porque la actuación administrativa logre sus fines y para tal fin deben removerse los obstáculos formales y tomarse las medidas pertinentes.

- Concluye manifestando que el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal se encuentra íntimamente ligado con el principio de eficacia consagrado por el artículo 3º del CPACA y en consecuencia todo funcionario público debe actuar siempre considerando que las formalidades no pueden entorpecer la consecución del objetivo perseguido por una norma sustancial y que se debe tener presente el espíritu de la ley y por consiguiente los contenidos de fondo deben prevalecer sobre las simples formalidades.

2.2. Con los documentos radicados con los Nos. 20175290803942 del 28 de septiembre de 2017, 20175290817832 del 2 de octubre de 2017, 20175290821292 del 3 de octubre de 2017 y 20175290837192 del 6 de octubre de 2017, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se hicieron las siguientes solicitudes:

2.2.1. Que la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reponga la Resolución SSPD N.º 20174010150315 del 01/09/2017 y en tal sentido certifique al municipio de Icononzo – Tolima en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico para la vigencia 2016 y para el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

2.2.2. Se tenga en cuenta la nueva certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que se hace constar que la estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que se hace constar que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida y que será reportada y certificada.

2.2.3. Se tenga en cuenta el Acuerdo 003 del 24 de mayo de 2013 expedido por el Concejo Municipal de Icononzo – Tolima como norma vigente que establece los porcentajes o factores de subsidios o contribuciones a ser aplicados por los prestadores de los servicios públicos de

acueducto, alcantarillado y aseo durante la vigencia 2016 y siguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.

2.2.4 Así mismo solicitó como prueba de oficio decretar oficiosamente las pruebas adicionales que se consideren pertinentes eficaces y útiles.

2.3 Con el recurso de reposición, se allegaron los siguientes documentos para que fueran tenidos en cuenta como prueba:

2.3.1. Copia del oficio No. SP 044 de 26 de septiembre de 2017 por el cual se solicita la reversión de la Certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia 2016 está conforme a la metodología nacional establecida y se aporta nuevamente dicho documento.

2.3.2. Copia del oficio SP 045 de 26 de septiembre de 2017, mediante el cual se interpone recurso de reposición en contra de la resolución de descertificación.

2.3.3 Copia del Acuerdo Municipal N.º 003 del 24/05/2013.

2.3.4. Copia de la cédula de ciudadanía del Alcalde Municipal de Icononzo

2.3.5. Copia del acta de posesión del Alcalde Municipal de Icononzo.

Los anteriores documentos, con su valor legal se incorporan a expediente.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta SSPD procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

- **Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el "Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida"**

En atención a los argumentos del municipio, se debe señalar, que la Resolución No. SSPD 20174010150315 del 1 de septiembre de 2017 consideró el requisito del título del presente aparte como incumplido, toda vez que la certificación cargada el día 17 de abril de 2017 en el sistema contenía solo lo siguiente:

COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACION (CPE)

Decreto No. 032 de 12 de Mayo de 2016
Icononzo – Tolima

CERTIFICA

Que, la estratificación Urbana para la vigencia 2016 corresponde a **Metodología Tipo 2**, que la estratificación de Centros Poblados vigente corresponde a **Metodología Tipo 3** y que la estratificación de Zona rural - Fincas y Viviendas Dispersas vigente corresponde a **Metodología Fincas y Viviendas Dispersas Rurales**, las cuales fueron impartidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y se encuentran debidamente adoptadas por el Municipio.

La siguiente es expide a solicitud del interesado a los tres (03) días del mes de Abril de 2017.

Así las cosas, del texto anteriormente relacionado se podía inferir que la certificación no tenía los elementos requeridos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015, toda vez que en la misma no constaba que la estratificación aplicada en la vigencia 2016 estuvo conforme a la metodología nacional establecida, en consideración a lo cual el ente territorial fue descertificado.

No obstante lo anterior, se advierte que como anexo a su recurso de reposición, el municipio aportó la siguiente certificación de la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación que da cumplimiento a lo requerido por el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015, veamos:



En este orden de ideas, se observa que, con ocasión a la descertificación, el municipio aporta un documento que aclara la certificación inicialmente reportada por el ente territorial, cumpliendo con todos los elementos requeridos para acatar el criterio del artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015, por lo cual, con ánimo garantista, se tendrá como cumplido el requisito en cuestión.

Sin perjuicio de lo anterior, se insta al ente territorial para que verifique, conforme a las obligaciones que le asisten, la información requerida y el indicador en el cual debe ser reportada en la oportunidad establecida en la norma, a efectos de lograr la certificación que nos ocupa y evitar futuros inconvenientes, como el debatido en este acto administrativo.

- **Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el "Reporte en el SUI del acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique complemente o sustituya."**

Respecto a los argumentos esgrimidos por el recurrente, es preciso hacer referencia a lo señalado por esta Superintendencia en la Resolución SSPD N.º 20174010150315 del 01/09/2017 en la cual se indicó frente al Acuerdo Municipal N.º 003 del 24 de mayo de 2013 que dicho acto administrativo solo fijó porcentaje de subsidio para el cargo fijo del servicio de alcantarillado, pero no para el vertimiento básico, incumpliendo de esta manera el requisito relacionado con el "Reporte en el SUI del acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique complemente o sustituya". Veamos:

FACTORES DE SUBSIDIOS

Estrato	% de Subsidio		
	Acueducto	Alcantarillado	Aseo
	Cargo Fijo y Consumo Básico	Cargo Fijo	Cargo Fijo
1	60	60	60
2	40	40	40
3	15	15	15

Sobre el particular, debe recordar el ente territorial, el artículo 99.5. de la Ley 142 de 1994 que dispone ***“Los subsidios no excederán, en ningún caso, del valor de los consumos básicos o de subsistencia. Los alcaldes y los concejales tomarán las medidas que a cada uno correspondan para crear en el presupuesto municipal, y ejecutar, apropiaciones para subsidiar los consumos básicos de acueducto y saneamiento básico de los usuarios de menores recursos y extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, dando prioridad a esas apropiaciones, dentro de las posibilidades del municipio, sobre otros gastos que no sean indispensables para el funcionamiento de éste. La infracción de este deber dará lugar a sanción disciplinaria”*** (negrilla fuera de texto)

Ahora bien, con el fin de precisar el tema en cuestión este despacho se permite citar los conceptos de cargo fijo y consumo básico establecidos en la Resolución No. 151 del 2011 de la CRA por la cual se hace una ***“Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo”***, así:

“Cargo fijo. Valor unitario por suscriptor o usuario, que refleja los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio, independientemente del nivel de uso.”

“Consumo Básico. Es el destinado a satisfacer las necesidades esenciales de consumo de las familias, cuyo valor es definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.”

De acuerdo a lo anterior, el consumo básico es aquel que ostenta la calidad de principal en relación con la satisfacción de las necesidades esenciales de los usuarios con respecto a los servicios públicos, mientras que el cargo fijo es aquel valor accesorio, relacionado con la administración del servicio, que no tendría razón de ser, sino por la existencia del consumo básico, que a la postre es el destinado a satisfacer las necesidades de las familias de tener acceso a los servicios esenciales.

Ahora bien, como acertadamente lo señala el recurrente, el artículo 2.3.4.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015 establece como beneficiarios del subsidio a los usuarios de menores ingresos, pero debe recordar que esto se presenta en las condiciones que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico a los del estrato 3, de las zonas urbanas y rurales. En efecto, la mencionada Comisión al expedir la Resolución CRA 151 de 2001, dentro del artículo 2.4.3.1 estableció que en las formulas tarifarias se incluye un cargo por consumo, de lo que es claro que el porcentaje de subsidio debe recaer además sobre dicho cargo, veamos:

“Artículo 2.4.3.1 Elementos de las fórmulas tarifarias. Las fórmulas tarifarias incluyen: cargo fijo, cargos por unidad de consumo básico, complementario y suntuario. Para su cálculo se deberán considerar los costos de prestación del servicio y los subsidios y aportes solidarios establecidos por la Ley 142 de 1994.

(...)

Artículo 2.4.3.3 Cargo por Unidad de Consumo Básico. Para todos los usuarios residenciales, el cargo por unidad de consumo básico (CB) tendrá como costo de referencia el Costo Medio de Largo Plazo (CMLP).

Las tarifas aplicables a dicho consumo en cada estrato resultan de aplicar los factores de subsidio y contribución y de descontar en los estratos subsidiables los componentes de inversión, así:

$$C_{Bi} = CMLP \times F_{ij} \times S_{ii}$$

donde:

C_{Bi}: Tarifa para el cargo básico del estrato *i*.

F_{ij}: **Factor de subsidio** o contribución aplicado al estrato *i* en el rango de consumo *j*.

S_{ii}: Subsidio por aportes de Inversión Social para los estratos subsidiables..."

Sobre el particular, mediante el Concepto SSPD-OJ-2016-684, se señaló que conforme a lo dispuesto por el artículo 99.5 de la Ley 142 de 1994, "Los subsidios no excederán, en ningún caso, del valor de los consumos básicos o de subsistencia. Los alcaldes y los concejales tomarán las medidas que a cada uno corresponda para crear en el presupuesto municipal y ejecutar, apropiaciones para subsidiar los consumos básicos de acueducto y saneamiento básico de los usuarios de menores recursos y responder la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, dando prioridad a estas... Por tanto, esta Oficina Asesora Jurídica ha sostenido... basándonos en la afirmación de la Corte Constitucional, en el sentido que "...el aporte solidario que se aplica a los estratos 5 y 6, comercial e industrial no puede exceder el 20% del valor del servicio prestado a cada uno, mientras que el subsidio que se otorga a los estratos 1, 2 y 3 **recae únicamente sobre el cargo por unidad de consumo**".

Por lo tanto, los Concejos Municipales deben fijar el monto del subsidio y contribución del consumo básico, con observancia de las disposiciones legales que regulan el tema.

De conformidad con lo anterior, no le asiste razón al recurrente pues las normas anteriormente relacionadas hacen referencia a la obligación de aplicar los subsidios frente al consumo básico, aspecto este que fue incumplido en el acuerdo municipal N.º 003 del 24 de mayo de 2013, en el cual si bien se fijó subsidio para el cargo fijo del servicio de alcantarillado, no se fijó para el cargo por vertimiento.

Así mismo es preciso indicarle al Municipio que si bien la Ley establece un porcentaje máximo para los subsidios, el Concejo debe fijar el mismo dentro de los límites establecidos por la norma y este debe recaer sobre los elementos de la fórmula tarifaria, de acuerdo al artículo 2.4.3.1 de la Resolución CRA 151 de 2001.

Por otro lado, si bien el recurrente indica que en las vigencias 2014 y 2015 fue reportado el mismo acuerdo N.º 003 de 2013 dándose cumplimiento a este indicador sin que se haya recibido observación alguna por parte de esta Superintendencia, lo que a su juicio conlleva a un cambio de posición de esta entidad frente a la legalidad del acuerdo en mención que irrumpe en la inseguridad jurídica y normativa del sector de agua potable y saneamiento básico, se debe señalar que el análisis hecho en vigencias anteriores no es objeto de debate en el presente acto administrativo y tampoco se traduce en un deber por parte del Despacho de adoptar la misma decisión de certificar al municipio de manera consecutiva en las siguientes vigencias, máxime cuando la evaluación de requisitos es anual y se predica respecto a la predicabilidad de los documentos reportados frente a cada vigencia de manera independiente.

Lo anterior, a su vez cuando no se ha hecho un juicio de legalidad respecto al acuerdo reportado, sino un pronunciamiento respecto a la acreditación de un requisito establecido en el Decreto 1077 de 2015 para efectos de certificar o no al municipio en materia de SGP APSB para la vigencia 2016, sin que ello pueda conllevar a afectar la seguridad jurídica en materia del sector de agua potable, respecto a la aplicación de las normas, toda vez que estas son claras respecto a los elementos de la tarifa y sobre los cuales deben recaer los subsidios dentro de la misma y para cada servicio.

En este orden, al haberse aportado por parte del municipio el acuerdo municipal N.º 003 del 24 de mayo de 2013, que no cumple con el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015, es

claro que el Despacho no cambió de criterio, por el contrario, evidenció que el ente territorial no acató la totalidad de requisitos para ser sujeto a certificación, conforme a disposiciones que son obligatorio conocimiento para el municipio y que datan del año 1994 (Ley 142 de 1994) y 2001 (Resolución CRA 151 de 2000) y al advertirse tal circunstancia, esta Superintendencia no puede hacer caso omiso a ello, puesto que es claro que tal y como fue señalado previamente, el acuerdo reportado por el municipio no fijó porcentajes de subsidio para el vertimiento básico del servicio de alcantarillado, lo que de suyo conlleva a que este vedado para el despacho dar por cumplido el requisito en cuestión.

En atención a lo anterior, es claro que el Municipio de Icononzo no cumple con la totalidad de los requisitos que debe acreditar para ser sujeto a certificación y por tal razón fue descertificado mediante la resolución objeto de recurso.

Ahora bien, pese a que el recurrente echa de menos la aplicación de lo establecido en el segundo inciso del artículo 2.3.5.1.2.1.10 del Decreto N.º 1077 de 2015 indicando que en el proceso que adelanta la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado para certificar o descertificar a un municipio se deben aplicar las normas del Código de Procedimiento Administrativo en cuanto a la actuación administrativa, notificaciones, pruebas y recursos y que las actuaciones administrativas se desarrollaran especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad, este Despacho debe señalar la decisión adoptada en la Resolución SSPD 20174010150315 del 1 de septiembre de 2017, se surtió atendiendo los principios normativos establecidos y en garantía al debido proceso, por lo tanto todas las actuaciones adelantadas por esta entidad se encuentran ajustadas a derecho, lo cual se evidencia en la resolución objeto de recurso y en la actuación adelantada al ente territorial, que obra en el expediente No. 2017401351601029E.

Por otro lado, es de precisar que la facultad de la administración de decretar pruebas es potestativa y no obligatoria, máxime cuando el simple reporte del ente territorial conllevaba a evidenciar un incumplimiento frente al requisito establecido dentro del proceso de certificación, lo que bastaba para descertificarlo según lo señalado en el Decreto 1077 de 2015.

Sobre este punto, se debe precisar al ente territorial que el proceso adelantado para el caso concreto corresponde a una actuación administrativa adelantada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4º de la Ley 1176 de 2007 mediante la cual *“se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, a su vez regulado por el artículo 2.3.5.1.2.1.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015.

A su vez debe recordar el recurrente el artículo 2.3.5.1.2.1.11 del Decreto 1077 de 2015 la regula en el proceso que nos ocupa:

“Artículo 2.3.5.1.2.1.11. (...) la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto de todos los requisitos establecidos para el proceso de certificación, podrán dentro del marco de sus competencias y por cualquier medio, entre otras cosas, solicitar soportes adicionales para confrontar la información reportada al SUI y al FUT, con otras fuentes y decretar pruebas adicionales para comprobar la consistencia de la información suministrada”.

Lo anterior, conforme al artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 que establece lo siguiente:

“Artículo 40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.

Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.

Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil”.

Tal y como se observa la administración podrá pedir soportes adicionales y decretar pruebas para confrontar información o para comprobar la consistencia de la información suministrada, pero conforme a lo expuesto previamente, ello no fue necesario para el caso concreto, toda vez que no existió duda en que el ente territorial reportó documentos que no cumplían cabalmente con la norma.

De otro lado, con relación a los argumentos del recurrente atinentes a que no debe desconocerse el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y que este se encuentra íntimamente ligado con el principio de eficacia consagrado por el artículo 3° del CPACA se debe señalar que el proceso de certificación corresponde a una actuación administrativa atinente a la verificación de una serie de requisitos establecidos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 (requisitos generales para todos los entes territoriales) y 2.3.5.1.2.1.7 (municipio adicionales para prestadores directos) del Decreto 1077 de 2015, según lo dispone el artículo 2.3.5.1.2.1.5, que debe hacer la SSPD con el fin de establecer si los entes territoriales pueden ser certificados, lo que les permitirá administrar o no los recursos del SGP – APSB para cada vigencia.

Por consiguiente, es claro que el ente territorial tiene la obligación de cumplir unos requisitos taxativamente establecidos en las normas señaladas dentro de un término. Para el caso concreto, vigencia 2016, el municipio de Icononzo debió acreditar, por expreso mandato normativo, los requisitos señalados en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015.

Por lo anterior, el municipio como parte de la administración pública y sujeto al principio de legalidad de que tratan los artículos 150 y 338 de la Constitución Política, está sujeto al ordenamiento jurídico, sin que ello implique la vulneración del principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, máxime cuando en desarrollo de este principio los municipios tienen que reportar la información establecida en el Decreto 1077 de 2015, para ser certificados para la administración de los recursos del SGP – APSB, requisitos que establecen aspectos sustanciales y de fondo, como el reporte de una acuerdo que establezca los porcentajes de subsidio y contribución dentro de los máximos y mínimos establecidos en la Ley 1450 de 2011, lo que incumplió sustancialmente el ente territorial, al omitir fijar porcentajes de subsidio sobre el cargo por vertimiento para el servicio de alcantarillado, lo cual se reitera, no puede ser desconocido por el Despacho.

Valga señalar, que es claro que los requisitos cuyo cumplimiento condiciona la certificación de un ente territorial no fueron establecidos al arbitrio de la Superintendencia y son de obligatorio cumplimiento del ente territorial si desea lograr la certificación que nos ocupa, por lo cual está en el resorte del municipio cumplir con las normas que le atañen en cada uno de los procesos y asumir las consecuencias establecidas en las normas en caso de incumplimiento.

Por otra parte, se advierte que si bien el municipio solicitó decretar pruebas en caso de considerarse pertinente, se debe señalar que teniendo en cuenta que los documentos obrantes en el expediente son suficientes para tener plena certeza de los pronunciamientos hechos por parte del despacho dentro de la presente resolución y del incumplimiento del municipio al *"Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemento o sustituya"* esta Superintendencia no considera pertinente, conducente o útil decretar pruebas de oficio dentro de la presente actuación.

En conclusión, el Despacho debe despachar desfavorablemente la solicitud de reponer la Resolución SSPD N.º 20174010150315 del 1 de septiembre de 2017, ateniéndose para ello a lo dicho a lo largo del presente acto administrativo, pues si bien el Municipio presentó con su Recurso de reposición la certificación del Comité Permanente de Estratificación que aclara el documento inicialmente reportado, por lo cual se tendrá por cumplido el requisito de *"Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida"*, NO desvirtuó su incumplimiento al *"Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de*

2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya", y en consecuencia la decisión de descertificarlo para la vigencia 2016, será confirmada.

Por lo expuesto, la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. 20174010150315 del 1 de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del Municipio de ICONONZO del Departamento de TOLIMA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de TOLIMA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



BIBIANA GUERRERO PEÑARETE

Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado

Proyectó: Gloria Paola Hernández - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: Katherine Arenas – abogada – Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Olga Rocío Yanquen Caro– Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información

Expediente: 2017401351601029E